

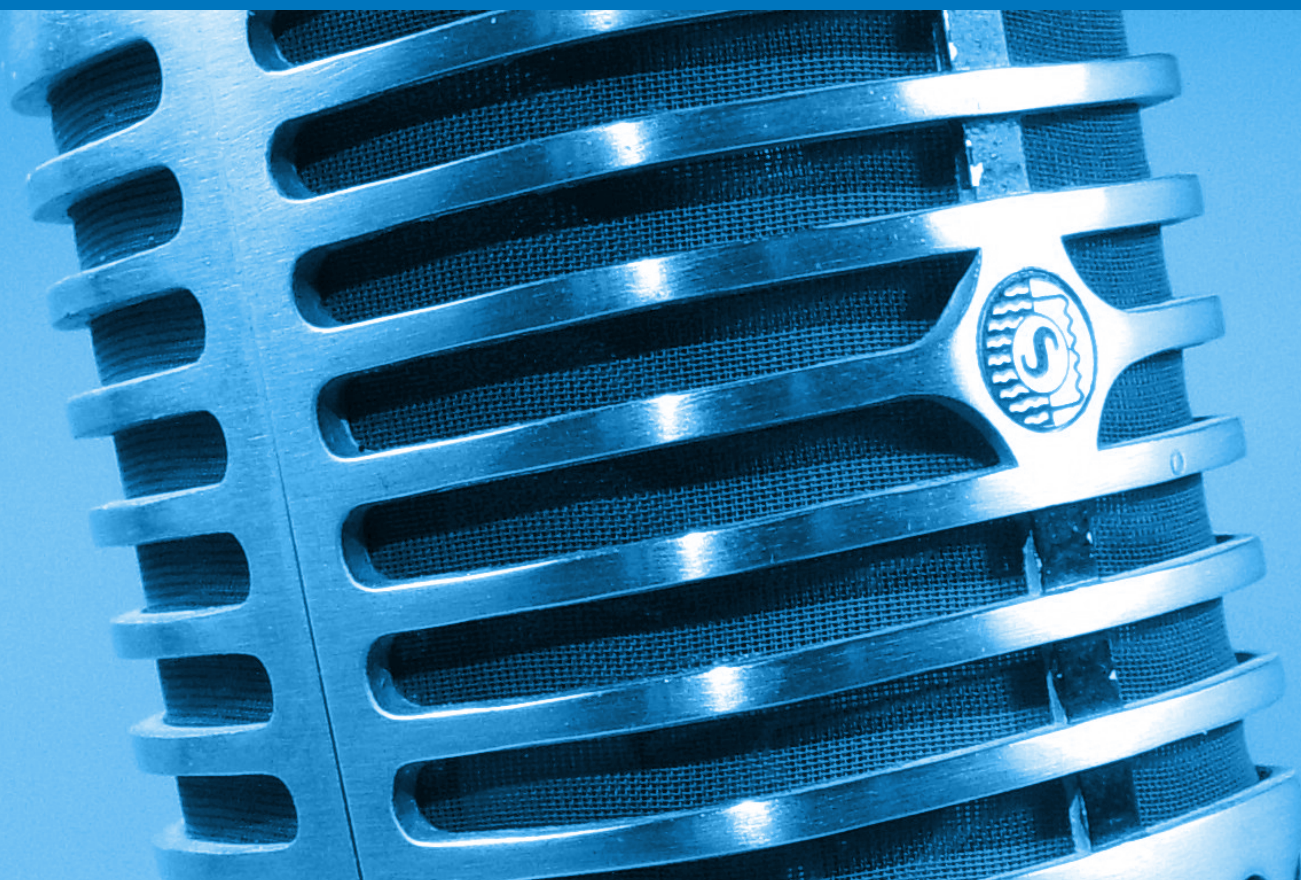
La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003

María Lourdes Lodi

Doctora en Ciencia Política por la UNR y Master in Democracy, Politics & Governance (Merit Award) por la Universidad de Londres. Docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR) Argentina
lourdeslodi@yahoo.com

Juan Bautista Lucca

Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO Argentina y Master en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca (España). Docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR) y CONICET (Argentina)
juanlucca@hotmail.com





Resumen

El presente artículo se focaliza en la reconstrucción y el análisis de las agendas electorales que los principales candidatos a la presidencia de la Nación presentaron de cara a los comicios del 27 de abril de 2003 en Argentina. Esta reconstrucción se realizó a partir del relevamiento de diarios La Nación, Clarín y Página 12 desde el 15 de febrero al día de las elecciones. Esta información fue ordenada en relación a tres dimensiones de análisis: motivaciones democratizantes y del aumento de la equidad, motivaciones administrativo-institucionales y motivaciones económico-financieras

Las principales conclusiones a las que se arriba es que la agenda electoral estuvo condicionada principalmente por tres factores: que la lógica utilizada en la definición de la agenda estuvo condicionada la fragmentación partidaria; que la forma en se daban a conocer los temas de agenda estuvo fijada por la necesidad de adaptar los discursos a un amplio electorado indiferente e indeciso; y que el contenido de las agendas estuvo determinado por la aguda crisis, o “estado de necesidad” que afectaba tanto a la economía, como al sistema político y a la propia sociedad argentina.

Palabras clave: Agenda electoral, elecciones 2003, Argentina, Presidente

Abstract

This paper focuses on the reconstruction and analysis of electoral agendas of the candidates for president in the elections of April 27, 2003, in Argentina. This reconstruction was performed by collecting the newspapers La Nación, Clarín and Página/12 from February 15 to Election Day. This information was analyzed in three dimensions: democratizing and equity motivations, administrative and institutional motivations and economic-financial motivations.

The main conclusions we reached in this paper is that the electoral agenda was conditioned by three factors: party fragmentation, indifferent and undecided voters and the acute crisis that affected both the economy and the political system and society itself Argentina.

Keywords: Electoral Agenda, elections 2003, Argentina, President

María Lourdes Lodi y Juan Bautista Lucca, “La agenda electoral en la campaña presidencial argentina de 2003”. Cuadernos del Ciesal. Año 15, número 17, enero-diciembre 2018, pp. 27-49.

1. Introducción

Luego de la profunda crisis política desatada en el 2001, los comicios del 27 de abril de 2003 en Argentina aparecían, a los ojos de la ciudadanía, como el espacio de la ilusión después de la catarsis; a los ojos de los candidatos, como la prueba de fuego en la definición de un nuevo proyecto de país y como el momento de las oportunidades. Por ello, nos propusimos como objetivo del presente trabajo la reconstrucción y el análisis de las agendas electorales que presentaron los principales candidatos¹ a la presidencia de la Nación, a partir del relevamiento de sus declaraciones, discursos y propuestas durante los tres meses previos en los diarios *La Nación*, *Clarín* y *Página 12*.

Entendemos por *agenda* al conjunto de problemas, temas y demandas que requieren la atención del gobierno y que, de algún modo, buscan o pretenden ser objeto de política pública. Para que un asunto tenga acceso a la agenda necesita cumplir tres requisitos: que sea objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público, que una buena parte del público considere que se requiere algún tipo de acción, y que a los ojos de los miembros de la comunidad la acción sea competencia de alguna entidad gubernamental (Aguilar Villanueva, 1993: 34).

Esta definición del concepto de agenda nos obliga a aclarar que, metodológicamente, suelen distinguirse tres niveles de agenda. En primer lugar encontramos a la *agenda sistémica* (también llamada pública o no gubernamental) que refleja los problemas, prioridades y preocupaciones de la sociedad en general, y que usualmente se manifiesta en movilizaciones o hechos que logran sensibilizar a amplios sectores de la opinión pública. En segundo lugar se ubica la *agenda gubernamental*, (también denominada institucional o formal) que es el conjunto de problemas y demandas percibidos, definidos y considerados por parte de los agentes del gobierno. Por último, está la *agenda decisoria* compuesta por el conjunto de temas y problemáticas que finalmente son objeto de decisión y acción (o decisión de no acción) del gobierno.

Sin embargo, dentro de esta clásica categorización de las agendas, es posible anexar un cuarto tipo, que bien podría ubicarse entre la sistémica y la gubernamental, pero que tiene una naturaleza y dinámica propia: la *agenda electoral*. Esta se constituye por aquellos temas, problemas, propuestas y proyectos a los que los distintos candidatos hacen referencia durante la campaña electoral y que, de algún modo, preanuncian cuales *serían* sus acciones de gobierno en caso de obtener el cargo al que aspiran.

En este sentido, la *electoral* es aquella que, para ser en el futuro *agenda de gobierno*, mira en el presente a la *agenda sistémica* e intenta sensibilizarse ante ella. La agenda electoral tiene, en este sentido, la facultad de representar el “*deber ser*”, de ser idealista y optimista, y, en muchas ocasiones, todopoderosa.

Los períodos preelectorales son, además, tiempos de apertura de la agenda para la introducción de

1. Quienes de entre los 19 aspirantes a la Presidencia de la Nación tenían, según todos los sondeos de opinión, posibilidades reales de disputar la segunda vuelta electoral del 18 de mayo fueron Carlos Menem, por la *Alianza Frente por la Lealtad*; Néstor Kirchner, candidato de la *Alianza Frente para la Victoria*; Adolfo Rodríguez Saá, representando a la *Alianza Frente Movimiento Popular*; Elisa Carrió por *Afirmación para una República Igualitaria* (ARI); y Ricardo López Murphy, candidato del *Movimiento Federal Recrear* (MFR).



nuevos temas o para la redefinición de problemas ya existentes, son el momento de la búsqueda de apoyos y de la elaboración de consensos, la etapa de la promesa y el convencimiento, la fase inicial en la construcción del liderazgo y la legitimación del poder. Por todo esto, es que junto con el “*deber ser*” entra en juego otro verbo común en política al que Maquiavelo ya nos hacía referencia en *El Príncipe*: el “*parecer*” (Maquiavelo, 1995: 121).

En tiempos de campaña la *apariencia* suele generar más adeptos que el “*ser*”, y es por esto que la imagen, la persuasión y la creatividad pasan a formar parte de la agenda electoral como marco y complemento de las propuestas de los candidatos. Por momentos, la competencia entre ideas y proyectos se vuelve una competencia entre eficiencias de los mecanismos publicitarios. Ya no interesan tanto los contenidos de la oferta como las formas en que se ofrece.

En consecuencia, tanto los medios de comunicación masiva como las encuestas electorales resultan hoy un componente esencial de la tecnología de las campañas y sirven no sólo para informar y examinar a la opinión pública, sino también para influirla y moldearla. De hecho, son los medios de comunicación quienes generalmente se encargan de convertir cuestiones en problemas de agenda, obligando a los candidatos a pronunciarse a favor o en contra de un determinado tema, o bien, operando como “disparadores” frente algún acontecimiento social.

Puntualmente, lo que queremos remarcar, es que la formación de la agenda electoral no es un proceso aséptico ni neutral, y, aún menos, impersonal. Es un proceso en el que participan actores (candidatos, partidos políticos, grupos económicos, organismos financieros, organizaciones civiles, ciudadanía, entre otros) que ponen en juego sus recursos, presiones e influencias para sacar el mayor beneficio posible en la elaboración y potencial implementación de la agenda electoral.

Ahora bien, a fin de hacer más comprensible y asimilable el contenido de la agenda electoral para las elecciones presidenciales del 27 de abril de 2003, recurrimos a una serie de parámetros señalados por Sonia Draibe (1992), aunque reformulando y adaptando sus indicadores a los requerimientos del presente trabajo.

En primer lugar tenemos los parámetros de mayor eficiencia de los programas vistos desde el ángulo de las *motivaciones económico-financieras*. Dentro de los mismos se utilizan las siguientes categorías:

- a. La deuda externa y el FMI
- b. Política monetaria y cambiaria
- c. Políticas de empleo
- d. Políticas orientadas al desarrollo económico
- e. Servicios Públicos

En segundo lugar encontramos los parámetros de mayor eficiencia de los servicios públicos vistos desde el ángulo de las *motivaciones administrativo-institucionales*. Respecto a los mismos la clasificación propuesta es:

- a. La Corte Suprema y la reforma del Poder Judicial
- b. La Reestructuración del Congreso y la reforma del sistema electoral
- c. Reforma política: promesas de austeridad, transparencia y eficiencia
- d. Política interior: relación de la Nación con las Provincias y los Municipios
- e. Política Exterior e Integración Internacional

Por último, Draibe presenta los parámetros de la mayor eficiencia de los programas y servicios públicos vistos desde el ángulo de las *motivaciones democratizantes y del aumento de la equidad*. Considerando la naturaleza de estas categorías se estableció la siguiente categorización:

- a. Planes Sociales
- b. Problemática “Piquetera”
- c. Políticas contra la Pobreza
- d. Políticas de Seguridad
- e. Políticas Sanitarias

2. La agenda electoral de los candidatos en las elecciones de 2003

a. Parámetro económico-financiero

Los candidatos sabían que, en caso de ganar, deberían enfrentar grandes desafíos, especialmente resolver la herencia económica. En este marco, el acuerdo con el FMI sería el primer test para la nueva gestión, puesto que en menos de tres meses el presidente electo debería definir los pagos o la renegociación de los vencimientos que nuestro país tenía con los organismos financieros internacionales. De hecho, el acuerdo con el FMI se entrecruzaba con otras cuestiones problemáticas que hicieron de la agenda económica el eje más complejo, nutrido y polémico del debate entre los candidatos.

Entre esas cuestiones se presentaba como urgente la compensación al sector financiero por la salida del corralón, la pesificación asimétrica, los amparos y la redolarización de los depósitos. Asimismo, se imponía la necesidad de rever la política cambiaria, de realizar un fuerte ajuste fiscal capaz de sanear las cuentas públicas y de reformar la coparticipación federal. Otro problema ligado a la negociación con el FMI era el del aumento de las tarifas de los servicios públicos y la revisión de los contratos de las empresas privatizadas.

Sumado a esto los candidatos no podían hacer caso omiso de los reclamos de un mercado de trabajo que padecía el más alto nivel de desempleo de la historia. Por ello, quienes buscaban acceder al sillón presidencial debían dar respuesta a esta demanda social que se postulaba como prioritaria a los ojos de la ciudadanía.



Y así como la agenda económica fue la más densa en contenido, también fue la que generó mayores distancias y confrontación en casi todos los temas. Las propuestas iban desde un liberalismo aliado con los Estados Unidos, a un keynesianismo nacionalista centrado en la producción, el trabajo y una dinámica participación del Estado en la economía.

- La deuda externa y el FMI

El acuerdo con el FMI se había convertido en el punto hacia el cual se dirigían todas las miradas y los 5 candidatos coincidían en que el agravamiento de la deuda pública era un escollo serio. Sin embargo, también fue uno de los principales motivos de discordia y división.

Frente al escenario de default, el menemismo sostuvo que el cuadro sería “insostenible” con vencimientos muy pesados al corto plazo, por lo cual se debía renegociar rápidamente porque consideraban se había perdido más de un año y medio de inacción. Según Carlos Menem, la Argentina debería proponer una fuerte disminución de los intereses de la deuda y en una reprogramación de los vencimientos, los cuales deberían postergarse al menos 5 años. Además sugirió que si llegaba al gobierno el país podría recibir entre 15 y 20 millones de dólares de parte de los organismos de crédito internacional.

Por su parte, Néstor Kirchner enfatizó la necesidad de llevar adelante una reprogramación seria de la deuda externa. Su propuesta era la negociación de una quita de capital y de intereses, y el otorgamiento de una espera que permitiese la reestructuración del gasto interno y la obtención de un superávit primario que garantice el cumplimiento de los compromisos. Su entonces vocero en lo económico, Oscar Tangelson, sostuvo que se identificarían las situaciones de acreedores de organismo multilaterales, bilaterales, instituciones privadas y acreedores individuales y se les ofrecería un menú de opciones que incluirían plazos, tasas de interés, quitas, programas de reinversión, entre otros aspectos.

Ricardo López Murphy expresó que la deuda con los organismos internacionales sería honrada en las condiciones más aceptables posibles. Este candidato no proponía quita alguna sino que los intereses fuesen drásticamente reducidos. En cuanto a la deuda pública con inversionistas privados planteó que sería reestructurada a largo plazo con muy baja tasa de interés. Sin embargo aclaró que no aceptaría que para negociar una deuda “haya que arrodillarse”.

La candidata del ARI, Elisa Carrió, al igual que el santacruceño sí buscaba quitas de capital. Su plan consistía en una reprogramación de los bonos a 30 años, un período de gracia mínimo de 3 años, mayores plazos de vencimiento y reducción de las tasas de interés. Un punto novedoso incluido por Carrió en relación a esta problemática fue su proclamación a favor de una participación activa en foros de arbitraje internacional y en la revisión de las condiciones en que se acumuló la deuda.

Adolfo Rodríguez Saá también expresó su deseo de indagar sobre la legitimidad de la deuda pública, y sostuvo que se negociaría con los organismos internacionales sobre la base de un programa sustentable que respetase el derecho al progreso de los argentinos.

- Política monetaria y cambiaria

El fin de la convertibilidad y un país plagado de cuasi monedas devaluadas hicieron de la política cambiaria y monetaria otra de las cuestiones objeto de definición por parte de los candidatos. Para el candidato del Frente para la Victoria, era necesario mantener la flotación del dólar, vinculado a las necesidades del sistema productivo para que permitiese promover las exportaciones y lograr una sustitución eficiente de las importaciones. Kirchner no desaprovechó oportunidad alguna de descalificar a Menem, al aducir que la debacle económica y monetaria que vivió el país debe ser atribuida a la paridad peso-dólar, y de ahí su posición contraria a la convertibilidad.

El candidato del Movimiento Federal Recrear se proclamó a favor de la flotación libre con solo mínimas y ocasionales intervenciones del Banco Central. Prometió una moneda estable, propia y única que flotaría respecto del dólar y de otras monedas en el marco de un equilibrio fiscal y dentro de un mínimo control monetario. Del mismo modo expresó su voluntad de eliminar todos los bonos provinciales y cuasi monedas en circulación.

En cambio, Rubén lo Vuolo, referente económico del ARI, sostuvo que así como no sería conveniente un mercado de cambio fijo tampoco lo sería uno de flotación libre. Su objetivo sería estabilizar un tipo de cambio competitivo y compatible con el crecimiento sostenible a través de múltiples medidas tales como valores de referencia, liquidación de divisas con base en una canasta de monedas, aumento y diversificación de las exportaciones y control del movimiento de capitales.

Por su parte, Rodríguez Saá marcó que el tipo de cambio real sería el que equilibrase la cuenta corriente de la balanza de pagos, lo cual se obtiene con un mercado libre pero con controles que eviten movimientos especulativos. Al igual que Kirchner, Rodríguez Saá manifestó que establecer un dólar bajo, similar al del período de la convertibilidad, supone la destrucción de la industria interna y la profundización del desempleo. Sin embargo, aclaró que tampoco le parecía correcto el valor actual que condujo a la inflación de precios y la pulverización del salario real.

El único candidato que se opuso a la libre flotación del dólar fue Carlos Menem, que manifestó su voluntad de volver a la convertibilidad y lograr un acuerdo monetario con los EEUU ligado a su plan de dolarización de la economía. Sin embargo, en el andar de la campaña, estas ideas recibieron fuertes críticas que llevaron al ex Presidente a modificar su posición, al punto de proponer finalmente dejar "flotar" libremente el dólar en el marco de un régimen monetario que comprendiese la independencia del Banco Central y la prohibición de que se emitiese moneda para financiar el déficit público.

- Políticas de empleo

El país que recibiría el presidente electo sería uno con el más alto índice de desocupación de su historia (22,3%), de ahí que todos los candidatos tuviesen esta cuestión entre las prioridades de su agenda, aunque con enfoques diversos.



En relación a la generación de empleo, Elisa Carrió buscaría promoverlo tanto en el sector privado como a través de programas de obras públicas intensivos en mano de obra. En el ámbito privado el énfasis estaría puesto en el apoyo a las Pymes, que deberían asociarse en sistemas productivos locales (tales como programas específicos de vivienda social, de extensión de redes de agua potable y cloacas, de refacción y ampliación de escuelas, de caminos rurales y de forestación) y a las que se les facilitaría el crédito vinculado a la generación de empleo.

Por el contrario, Rodríguez Saá veía sólo en la obra pública el motor de la generación de empleo. Sería el Estado el encargado de crear y proveer 3 millones de puestos de trabajo a partir de un programa de construcción de 150.000 viviendas en un período de 6 meses que daría trabajo a 900.000 personas. Otros programas que absorberían mano de obra desocupada serían la canalización del río Bermejo, las obras que se realizasen contra las inundaciones en la pampa húmeda, un programa de forestación, y también la creación de dos empresas nacionales (petrolera y ferroviaria).

Con el mismo fin pero con muy diferentes medios, Ricardo López Murphy remarcó la importancia del derecho al trabajo; en consecuencia instaló entre sus propuestas la necesidad de bajar impuestos para generar trabajo formal. Como se ve, su visión del mercado de trabajo era más cercana a la de los tiempos de la flexibilización laboral y el neoliberalismo, donde el trabajo sería generado por la propia lógica del mercado y por la recuperación de la confianza y la seguridad jurídica que darían lugar nuevamente al acceso al crédito y la inversión.

Carlos Menem, quien esta vez se comprometió a impulsar un “trabajazo” y a bajar la desocupación al 10%, también planteó la necesidad de eliminar impuestos al trabajo para facilitar la contratación de mano de obra en el sector privado. En cuanto al empleo público, dijo que pretendía crear 500.000 puestos de trabajo a partir de un plan de emergencia ocupacional.

Por último, el gobernador santacruceño propuso un plan neokeynesiano de obras públicas que consistiría en la construcción de 3 millones de viviendas para generar 5 millones de puestos de trabajo. También lanzó, como Carrió, un plan de trabajo orientado a microemprendimientos y al estímulo de las Pymes. Según Kirchner la inversión pública y la profundización de la sustitución de importaciones fomentarían la generación de empleos en zonas específicas, ya que resultaba necesario focalizar el desarrollo productivo y el empleo en determinadas regiones.

- Políticas orientadas al desarrollo económico

Dentro de este eje de la agenda electoral encontramos diversas cuestiones dirigidas a promover el desarrollo económico y productivo del país. Vale la pena destacar cómo para algunos candidatos esta sección de la agenda se destacó por su contenido minucioso, bien estructurado y por una clara definición ideológica en cuanto al papel del Estado en el desarrollo económico; mientras que para otros quedaron muchos temas sin definición o dejados a la “libre interpretación”.

Así, vemos como el candidato del Frente Nacional Popular, Rodríguez Saá expuso una propuesta bastante abarcativa: expresó que se dictaría una *Ley de desarrollo económico* que promocionaría la ac-

tividad y traería beneficios a cada una de las provincias. En cuanto a la industria manifestó que con un tipo de cambio equilibrado la industria nacional podría crecer y competir adecuadamente. En sí, su proyecto de desarrollo económico estaba centrado en un rol activo del Estado en la inversión en obras públicas.

En cuanto a políticas productivas, Carlos Menem contempló la necesidad de poner en funcionamiento un sistema de generación de ahorro a largo plazo con destino a la financiación de viviendas y otras obras de infraestructura con estímulos fiscales para los ahorristas; sin embargo, la prioridad seguiría siendo para él la inversión privada. En cuanto a las exportaciones, el ex presidente propuso la creación de un *Ministerio de Comercio Exterior* para aumentarlas.

López Murphy hizo referencia especialmente a la necesidad de promover las inversiones apoyándose en la reducción de las tasas de interés, en la recuperación de la seguridad jurídica y en la estabilidad de las normas tributarias. Julio Piekars, economista de Recrear, explicó la propuesta de este partido se orientaba también a acentuar la competitividad de las economías regionales para la cual prometían mejorar los servicios de transporte y comunicaciones a todas las regiones del país, desarrollar el turismo, y dar continuidad a las exportaciones agroindustriales. El aumento del comercio exterior se lograría, para ellos, actuando agresivamente en la remoción de los obstáculos para-arancelarios.

Por su parte, el tercer candidato del PJ, Néstor Kirchner criticó al modelo neoliberal representado por Carlos Menem y Ricardo López Murphy y se postuló en defensa de “lo nacional” y en contra de los que se inclinan por los grupos financieros y la economía concentrada. En este sentido, Kirchner expresó su deseo de alcanzar un mayor desarrollo de la industria local, para lo cual sería necesario protegerla frente a los productos de países desarrollados y mejorar el tipo de cambio. Tangelson, referente económico de Kirchner, se refirió a la importancia de la difusión de tecnología, integración de sistemas de información sobre mercados y productos, acceso al mercado de capitales, capacitación de los trabajadores y mejoramiento de la capacidad gerencial como complementos adecuados para la creación y consolidación del sector productivo. En este sentido, Kirchner explicó que es preciso recurrir al Estado no para remplazar al sector privado sino para impulsarlo con el efecto multiplicador keynesiano. Asimismo Roberto Lavagna, su potencial Ministro de Economía en caso de ganar las elecciones, dijo que era primordial garantizar e incrementar el consumo de la población, puesto que esa es la única manera de mantener un crecimiento sustentable de entre el 4 y 4,5 % anual en un periodo de tiempo prolongado. En relación al comercio exterior, Kirchner planteó que la competitividad en las nuevas condiciones internacionales se basaría en la diversidad de productos, la calidad, el diseño, el conocimiento de los mercados y el aprovechamiento de ventajas comparativas. Para el santacruceño las exportaciones eran cruciales, ya que de allí saldrían las divisas para pagar la deuda y comprar los insumos necesarios para realizar las inversiones y aumentar el consumo.

Por último, Elisa Carrió sostuvo que los instrumentos de promoción de la inversión serían múltiples: entre ellos habría preferencia impositiva para las ganancias reinvertidas; una nueva legislación anti-monopólica, la creación de una agencia técnica de promoción de inversiones estratégicas, y la aplicación del régimen de “compre argentino” así como incentivos de acceso de las Pymes a capital de riesgo. Su exponente económico, Rubén Lo Vuolo, planteó la creación de un Fondo Nacional de Desa-



rollo Local, destinado al desarrollo de las economías regionales y motorizado por las esas pequeñas y medianas empresas. En cuanto a la promoción industrial y comercio exterior expresó que la estructura arancelaria debería favorecer un cambio en el patrón de especialización industrial y de exportaciones, mejorando la protección efectiva de los sectores productivos que elaboran bienes más diferenciados, con mayor valor agregado, mayor incorporación de progreso técnico y/o de mano de obra.

• Servicios Públicos

En relación a la problemática de los servicios públicos pueden distinguirse distintas cuestiones a las que los candidatos presidenciales tuvieron que ofrecer alguna respuesta, como por ejemplo, el de las tarifas, la calidad de los servicios públicos, el rol de los entes reguladores, la renegociación de los contratos entre el Estado y las empresas privatizadas, entre otros aspectos.

La candidata presidencial Elisa Carrió sostuvo que revisarían integralmente todos los contratos (caso por caso) y que la discusión de las tarifas se haría considerando informes técnicos independientes sobre todo el proceso de privatización y teniendo en cuenta la adopción de subsidios cruzados que incorporasen una tarifa social. Según ella la prioridad sería la de insertar el sistema de servicios públicos en la estrategia de crecimiento económico basado en una mejor distribución del ingreso, y en una intervención activa de los entes de regulación.

El líder del Movimiento Nacional y Popular, al igual que Carrió, prometió revisar todos los contratos de las empresas privatizadas y concesionadas. Sostuvo que los contratos serían auditados y se controlarían las cláusulas contractuales y, de ser necesario se adoptarían las medidas correctivas pertinentes sin afectar derechos adquiridos. A esto agregó que se analizaría la calidad de los servicios a la hora de renegociación de las tarifas. El puntano se refirió también al mejoramiento de los ferrocarriles y al deseo de construir moderno tren bala hasta la ciudad de Mar del Plata y la voluntad de crear una empresa nacional de hidrocarburos que retome el control sobre el petróleo y deje en manos de Estado las principales decisiones en torno de este recurso.

Por su parte, Kirchner prometió que revisaría las privatizaciones y que no habría subas fuertes en las tarifas. En general su plan consistía en analizar los contenidos y compromisos asumidos por los concesionarios, en el marco de la recuperación de la función reguladora del Estado, entendida como la responsabilidad y facultad de fijar las reglas y velar para que se cumplan, equilibrando los derechos de los prestadores y usuarios de servicios.

En referencia a los servicios públicos privatizados, López Murphy sostuvo que renegociaría los contratos así como también los marcos regulatorios introduciendo competencia en la mayor medida posible. También planteó que buscarían evitar la reestatización de los servicios y que, en cuanto al aumento de las tarifas este sería gradual y acompañado por la recomposición de salarios y jubilaciones.

Cuando se le preguntó a Menem qué haría con los servicios públicos privatizados, contestó que los contratos que requiriesen ser renegociados lo serían en el marco del derecho de la propiedad y en base al interés de los usuarios: aquellas empresas que no hubiesen satisfecho sus obligaciones serían

sancionadas e incluso podrían darse de baja sus contratos. En cuanto a la recomposición tarifaria por la que presionaban las empresas y el FMI, Menem sostuvo que debería hacerse de la mano de la recomposición del poder adquisitivo de los salarios ya que sin ellos sería imposible readecuar las tarifas públicas. Asimismo, añadió que era preciso garantizar el mantenimiento de la calidad de los servicios privatizados y que propondría una ley de marco regulatorio general de servicios públicos.

b. Parámetro administrativo-institucional

En un clima de instituciones cuestionadas, donde el “que se vayan todos” había dejado expresado el reclamo de la ciudadanía hacia la clase política, con un fuerte descrédito del Congreso y una Corte Suprema de Justicia ubicada en el ojo de la tormenta, la reforma política emergió como un imperativo en la agenda de los candidatos presidenciales. Esta reforma debía dar respuesta a distintos problemas, entre ellos, la demanda social de la reducción del llamado “costo de la política”, con sus gastos espurios, jubilaciones de privilegio y nichos de corrupción; la modificación del sistema electoral con sus tan criticadas “listas sábana”; la ineficiencia de la administración pública en sus diferentes niveles; y la recuperación de la seguridad jurídica con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la participación ciudadana. Además de esta reforma política para la reconstrucción institucional que, para algunos, suponía una reforma constitucional, otro aspecto por resolver era si la prioridad en cuanto a integración internacional sería alinearse con el MERCOSUR o con el ALCA.

• La Corte Suprema y la reforma del Poder Judicial

En los últimos días previos a las elecciones, el futuro de los nueve integrantes del máximo tribunal ocupó un lugar medular en la campaña proselitista por el dictamen de la Corte respecto a la redolarización de los depósitos bancarios. Ahora bien, en la voluminosa lista de acciones previstas para el sistema judicial, los candidatos difirieron de manera llamativa en cuanto a la futura integración del Consejo de la Magistratura y en el destino de los cuestionados jueces federales. En cambio, coincidieron en las propuestas de descentralizar e informatizar la administración de justicia, de mejorar la capacitación de los magistrados, de reducir la injerencia política en la designación de jueces, y de acelerar la ocupación de los juzgados vacantes.

Por ejemplo, Kirchner manifestó durante un acto de campaña en Gualaguaychú que con la vieja Corte Suprema de Justicia no se podría fundar una nueva nación y que por lo tanto emprendería reformas en la justicia. En este sentido prometió estudiar en detalle los casos particulares de mal desempeño de los jueces y se expresó a favor del análisis y eventual juzgamiento político de todos los miembros de la Corte por los mecanismos previstos por la Constitución.

En esto último coincidía Adolfo Rodríguez Saá, quien conjuntamente exponía la necesidad de convocar a un plebiscito para definir si los jueces de la Corte Suprema debían seguir en sus cargos. Por su parte, la candidata de ARI dedicó un lugar de privilegio en su plataforma a la promesa de hacer cesar en el ejercicio de sus funciones a los nueve ministros, a partir de una reforma constitucional, ya que,



denunció, “siguen siendo el reaseguro de la impunidad del pasado”. Asimismo prometió una reformulación del Consejo de la Magistratura y la creación de una Escuela Judicial para mejorar la selección y formación de los jueces.

Por otro lado, la idea de los equipos de López Murphy coincidía en cuanto a la necesidad investigar la conducta de los jueces de la Corte, pero no al cuerpo en su conjunto, sino a cada uno de sus miembros en particular. El punto en el que difirió con el resto de los candidatos fue en la integración del máximo tribunal ya que López Murphy sostenía una vuelta a la composición original de 5 miembros. Además planteó la necesidad de reducir la participación de diputados y senadores en el Consejo de la Magistratura.

Carlos Menem difícilmente podía ponerse en contra de una Corte diseñada en parte por él. Por ende, sin demasiadas declaraciones al respecto, rechazó la posibilidad de realizar juicios colectivos y propuso eliminar el Consejo de la Magistratura en una futura reforma constitucional para devolverles a los magistrados el gobierno el poder Judicial.

- La Reestructuración del Congreso y la reforma del sistema electoral

El Parlamento fue durante el año 2002 el principal objeto del reclamo ciudadano de renovación de la clase dirigente en el marco de una profunda crisis de representación y de desprestigio de los partidos políticos. Sumado a las denuncias de los escándalos de corrupción en esta institución, se encontraban las acusaciones de ser un organismo costoso y sobredimensionado. En este sentido, los cinco candidatos revelaron un inusual nivel de coincidencias en reflotar las viejas promesas de una nueva política planteando, por ejemplo, la eliminación de la llamada “lista sábana”, un mayor control del financiamiento de los partidos políticos y la permisión de ingreso de independientes en el Parlamento.

Fue Elisa Carrió quien, antes que nadie, levantó las banderas de una reforma constitucional para producir la caducidad de mandatos porque, según ella, la gobernabilidad propuesta por el Congreso “cautivo de las mafias” era “vía sobornos”. Además advirtió que en caso de llegar a la Casa Rosada su gobierno no se iba a someter a los acuerdos oligárquicos con el Congreso y que por ello gobernarían con la consulta popular. En cuanto al constante crecimiento de la planta legislativa, la líder del ARI propuso crear un cuerpo permanente de asesores externos para evitar que se aumenten los costos.

Para reducir costos el candidato de Recrear, Ricardo López Murphy, imaginaba rebajar casi a la mitad la cantidad de bancas de diputados al hacer cumplir el piso mínimo de dos legisladores por provincia que establecía la Constitución Nacional. Además de promover un ajuste en el número de asesores y comisiones pensaba en una reforma constitucional a futuro en la que podría reducirse el tamaño del Senado permitiendo solo dos representantes por provincia.

Carlos Menem acordaba con López Murphy en la necesidad de encarar una fuerte reforma institucional que redujese a la mitad el número de legisladores nacionales. Sin embargo en los últimos días de campaña comenzó a promocionar un cambio de magnitud tal vez mayor: prometió eliminar una cámara del Congreso y crear un Parlamento formado por cinco representantes de cada distrito. Asimis-

mo insistió en un plan de regionalización del país de modo que solo queden 6 gobiernos distritales con el consiguiente cierre de 18 legislaturas.

Oponiéndose a Menem, Néstor Kirchner consideró “demencial” la idea de cerrar una cámara y dijo que “no necesitamos gestos demagógicos que desvirtúen el sistema republicano, sino transparencia y control efectivo de las malas prácticas que desprestigiaron al Congreso”. También prometió llevar adelante una reforma que consistiría en la eliminación de las listas sábana, la transparencia del financiamiento de los partidos políticos y menores requisitos para la formación de nuevas agrupaciones políticas.

Por último Rodríguez Saá tampoco creyó en las reducciones inmediatas del número de bancas aunque sí tras una reforma constitucional a largo plazo. En principio proponía otorgar un presupuesto a cada legislador sin gastos reservados para eliminar la posibilidad del despilfarro de fondos.

- **Reforma política: promesas de austeridad, transparencia y eficiencia**

Los enunciados de todos los candidatos se repetían al hablar de una política más austera y transparente; aunque lo que cambiaba eran claramente los argumentos para llevar adelante este objetivo.

Por ejemplo, López Murphy sostuvo la necesidad de llevar adelante una reconstrucción institucional que permitiese la recuperación de la seguridad jurídica, que era un prerrequisito para el despegue y normal funcionamiento de la economía. Asimismo, se proclamó a favor de una reforma administrativa nacional, que reduciría niveles administrativos del aparato estatal, eliminando superposiciones y redimensionando organismos con criterios de eficiencia, que combatiría también el clientelismo y el despilfarro de las finanzas públicas. Respecto a la oficina anticorrupción, sostuvo que ella debería ocuparse de proyectar normas de control y controlar las declaraciones juradas de todos los funcionarios y agregó que no debería estar en el Ministerio de Justicia sino ser independiente.

Néstor Kirchner, en cambio, pensaba mantener la oficina anticorrupción en el Ministerio de Justicia, y fortalecer sus funciones, ya que la lucha contra la corrupción era uno de los ejes principales de su discurso.

Por su parte Rodríguez Saá presentó un plan de austeridad estatal que establecía, entre otras cosas, que ningún funcionario podría ganar más de \$3000, la derogación de las jubilaciones de privilegio, la eliminación de la totalidad del parque automotor y aeronáutico del Estado, y la supresión de los fondos reservados y del uso de teléfonos celulares en la administración pública. Según él, la Oficina Anticorrupción debía actuar mano a mano con las autoridades para ejercer un control permanente.

Elisa Carrió acordó con el sanluiseño en darle a la Oficina Anticorrupción más poder e independencia del Poder Ejecutivo. Entre sus slogans de campaña aparecían “El ARI es un compromiso moral”, “qué bueno es luchar con las manos limpias”, “Apelo al voto ético”, “la causa contra el régimen”. En esta búsqueda de transparencia y legitimidad, la líder del ARI otorgó un lugar primordial a la apertura de nuevos canales de participación ciudadana y a la necesidad de dar a publicidad las agendas de los



funcionarios para que la población pudiese tener acceso a la información. En cuanto a la reducción del aparato del Estado y la mejora en su funcionamiento, Lilita propuso una reforma sin despidos, pero con ascenso y descenso por concurso de los funcionarios públicos.

En caso de llegar al gobierno, Carlos Menem prometió garantizar el cumplimiento de la ley y recuperar la seguridad jurídica. Una de sus “medidas de impacto” (como las llamaba en la intimidad) sería la convocatoria a un plebiscito para reformar la constitución. La reforma incluiría la eliminación del voto obligatorio, la vuelta al colegio electoral en las elecciones presidenciales, y el agregado del sistema de enmiendas para la Carta Magna. En cuanto a la Oficina Anticorrupción, se distanció de los demás candidatos y propuso eliminarla, en su lugar pondría a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

- **Política interior: relación de la Nación con las Provincias y los Municipios**

En este apartado de la agenda electoral nos referimos a aquellas propuestas de los candidatos referentes a cambios a realizar en las provincias y en el régimen de coparticipación federal, y a los planteos sobre regionalización o descentralización de los servicios públicos.

Vemos aquí, entonces, como López Murphy planteó la importancia de lograr la integración del interior del país de modo tal que no hubiese regiones que se sintiesen aisladas. Para ello manifestó que realizaría una reforma del régimen de coparticipación federal de impuestos para lograr la plena correspondencia fiscal y que otorgaría incentivos para que cada provincia o municipio equilibrara sus cuentas públicas

Siguiendo con la coparticipación federal, Néstor Kirchner prometió restituir parte de la misma ya que, explicaba, “sé de las injusticias que sufrieron nuestras provincias, en especial la de Buenos Aires. Deben restituirle los 8 puntos de coparticipación federal que le quitaron en 1986...”. Asimismo planteó que la reforma del Estado que deseaba llevar a cabo incluía la municipalización de las políticas públicas y de la recaudación tributaria para dar mayor poder a los municipios.

Como expusimos anteriormente, Carlos Menem también insistió en un plan de regionalización del país, pero este proyecto suponía cambios institucionales de gran magnitud. El riojano quería que solo quedasen seis gobiernos regionales lo que conllevaría el cierre de 18 legislaturas. Este plan, explicó, se fundamentaba en la reducción del gasto público y era un objetivo “a largo plazo”. En cuanto a política fiscal, una de sus ideas era la de coparticipar directamente a los municipios desde el gobierno nacional.

Sin hacer alusión ni a la coparticipación ni la regionalización, Rodríguez Saá introdujo una cuestión que ya había sido objeto de controversias en épocas de Alfonsín: la del traslado de la Capital Federal. No ya a Viedma, sino a alguna ciudad del interior de la provincia de Córdoba.

- Política Exterior e Integración Internacional

El futuro presidente de la Argentina estaría más apremiado que otros recién llegados al poder por conciliar la agenda interna con la externa, en especial, por demoras en definiciones relativas al posicionamiento del país en el mundo y por sucesos sobre los cuales, más allá de palabras, aún no se vislumbraban políticas de Estado como, por ejemplo, la seguridad frente al terrorismo internacional, la guerra de EEUU contra Irak, la definición de la relación del país con Brasil y EEUU, la opción entre ALCA y Mercosur.

En este contexto internacional sombrío, la figura de Carlos Menem se volvió el centro de las diatribas. Su negativa a condenar el ataque norteamericano a Irak le otorgó a sus rivales la posibilidad de criticarlo y exponerlo como un defensor de la guerra que rechazaba más del 90% de la población. Inclusive Carlos Menem proponía recrear una sólida alianza estratégica con el país del norte, por lo cual el ALCA, y en especial con una alianza con los EEUU, era la vía de reinserción internacional del país. En cuanto Mercosur, indicó que *intentaría* profundizar la relación con los “países hermanos”, colocando como prioridad la convergencia de las políticas macroeconómicas de la Argentina y Brasil y la estabilización del tipo de cambio entre las dos monedas.

Por el contrario, la candidata del ARI propuso un relanzamiento del Mercosur en el que impulsaría una institucionalización mayor, y buscaría la coordinación macroeconómica y nuevos proyectos de infraestructura y servicios conjuntos; e inclusive colocó al Mercosur como la plataforma de las negociaciones con el ALCA. En cuanto a la guerra la líder del ARI condenó la invasión a Irak y calificó de “escandalosa” la postura del gobierno frente al conflicto en Oriente Medio.

En sintonía con las críticas de Carrió, Néstor Kirchner también se distanció del caudillo riojano cuando habló de la postura de Menem favorable a los EEUU y a la guerra y, al igual que la chaqueña dijo que, de ganar Menem “se acabaría el Mercosur”. Su propuesta consistía en una política exterior seria, estable y abierta al mundo en la que el Mercosur sería el instrumento idóneo para integrar la región. Como Carrió, sostuvo que la participación en el ALCA debería definirse en el marco del proyecto de integración económico, política cultural y social que expresa el Mercosur. Además expresó su deseo en promover una activa relación con la Unión Europea y el Sudeste Asiático.

También Ricardo López Murphy expresó la necesidad de mejorar la solidez del Mercosur introduciendo mecanismos de coordinación de las políticas cambiarias y fiscal de los países miembros. Asimismo, como Kirchner y Carrió sugirió que la Argentina debería negociar su ingreso al ALCA en forma conjunta con los demás países del Mercosur, pero aclaró que en su opinión, el ALCA y el Mercosur no son proyectos antagónicos sino complementarios. Para este candidato la política exterior debía estar al servicio del sector productivo, por lo cual transformaría la cancillería en un instrumento plenamente comprometido con ese objetivo.

Por último, Adolfo Rodríguez Saá manifestó su intención de refundar el Mercosur, para lo cual proponía convocar a una reunión cumbre de presidentes en la que se hablaría de instituir una moneda común y de crear a un Banco Central del Mercosur. En referencia al conflicto en Irak, Rodríguez Saá afirmó que “Argentina no va a ir a ninguna guerra, el que quiera la guerra que vote a Menem”.



c. **Parámetro de motivaciones democratizantes y aumento de la equidad**

Si bien la agenda social no ocupó un espacio central en el debate electoral hubo ciertas problemáticas propias de la agenda sistémica a las que los candidatos no pudieron hacer caso omiso. Los indicadores sociales relacionados con la pobreza, la indigencia, y el desempleo revelaban una realidad alarmante que impulsaba a pensar en la recomposición del tejido social. A su vez, las estadísticas asociadas a la salud, la nutrición y el nivel educativo mostraban una dramática considerable, mientras que los atrasos en el pago a los docentes de varias provincias mantenían a miles de chicos sin asistir a clases. Sumado a esto, los niveles de delincuencia y la sensación de inseguridad en los principales centros urbanos eran inéditos. En este contexto, la continuidad de los planes Jefes y Jefas de Hogar, la asistencia alimentaria, la actividad piquetera, la lucha contra el delito, y el retorno a clases en las provincias de paro, aparecían como desafíos claves para el nuevo gobierno.

• Planes Sociales

Controversial desde su instrumentación, el “Plan Jefas y Jefes de Hogar” -que otorgaba 150 Lecop a 2 millones de desocupados- generó grandes polémicas entre los principales candidatos. Todos, menos el representante del Frente para la Victoria, cuestionaron la modalidad de la política social del gobierno y acusaron al duhaldismo de utilizar políticamente la distribución de los subsidios. Excepto en el caso de Rodríguez Saá y de López Murphy que planteaban su reemplazo, los otros postulantes sostuvieron que mantendrían, en principio, estos planes sociales.

Néstor Kirchner, aliado de saliente presidente Duhalde, sostuvo que respetaría el esquema de inscripción de los desocupados en los municipios y el control de los consejos consultivos. Una de las participaciones más cuestionadas dentro de estos consejos era la de las organizaciones de piqueteros, allí inscriptas como ONGs. A pesar de ello, Kirchner consideró adecuadas esas reglas de juego y, respondió que en su eventual gestión el diálogo con autoridad sería la base de sustentación de las políticas gubernamentales, como una manera de demostrar que no harían lo que quisieran con él.

Análogamente, Carrió dijo que seguiría con los planes de empleo y el plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados, y que no se tocarían hasta que no se lograra la reinserción laboral de los beneficiarios porque, explicó, quitarle a la gente ese único ingreso no es dignificarla sino dejarla en la más absoluta miseria. Más allá de esta coincidencia con Kirchner, Elisa Carrió denunció el manejo corrupto de esos planes de empleo en una dura crítica a Duhalde.

Menem también prometió mantener y profundizar los planes sociales, pero que se instrumentaría una reconversión del sistema de modo que existiese una contraprestación efectiva. Inclusive, en un acto en Formosa, aludiendo al plan Jefas y Jefes de hogar desocupados manifestó que “muchos creen que es un invento de Duhalde, pero se trata de la continuidad de *nuestros* planes trabajar”.

Ricardo López Murphy se oponía a la continuidad de los planes para Jefes y Jefas de Hogar; en consecuencia expresó que se asignarían fondos a empresas para que contratasen personal desocupado, de modo de evitar el clientelismo y el mercado laboral en negro. Sin embargo, reconoció que los cam-

bios deberían ser graduales, ya que “nadie en su sano juicio puede dejar sin ayuda social a 2.500.000 familias de la noche a la mañana”. Una de las modificaciones iniciales sería la instrumentación de una tarjeta social en reemplazo del pago en efectivo.

Rodríguez Saa también era partidario de poner fin a los planes para Jefes y Jefas de hogar e implementar su “Plan Nacional de Empleo”, con el cual reemplazaría a los subsidios gracia a la creación de 3 millones de puestos de trabajo genuinos con los que cada beneficiario cobraría 300 pesos y tendría una tarea a cargo. Al igual que los demás candidatos Rodríguez Saá reprochó a Duhalde el uso de planes sociales con fines electorales en beneficio de Kirchner.

- Problemática “Piquetera”

La problemática piquetera no fue una cuestión menor de la agenda electora, especialmente si consideramos que, de algún modo, las elecciones se adelantaron seis meses porque dos militantes sociales fueron asesinados durante la represión policial del 26 de junio de 2002 por un corte en el puente Pueyrredón.

Por su parte Carlos Menem, decidido a transformar a los piquetes en bandera de campaña, señalando que “aplicando la Constitución vamos a hacer que la paz retorne. Se acabarán los piquetes pese a que algunos los quieran justificar; el derecho a reclamar se acaba cuando empieza el de la persona que pretende circular para ir a trabajar, y vamos a hacer cumplir la ley”. Con estas palabras Menem buscaba captar el reclamo de quienes llegaban a tarde al trabajo o perdían premios de presentismos por el corte de caminos. Inclusive, hasta tuvo la astucia de encargar un aviso radial que decía: “*Con Menem va a haber orden. No le van a cortar más la calle*” que fue estrenado en la última semana de campaña.

Ricardo López Murphy fue otro “duro” en lo relativo a las protestas piqueteras. Aunque sostuvo que admitiría el derecho a la protesta aclaró que no toleraría el avance sobre el derecho de los demás. En este sentido prometió terminar con el accionar impune de los piqueteros en el contexto de la ley pero aseguró que reprimiría si fuese necesario. Además expresó refiriéndose a las agrupaciones piqueteras que “se terminará en la misma madrugada que asuma el financiamiento a organizaciones sediciosas para que conspiren para voltear a las instituciones”

Por su parte, Kirchner planteó, respecto a los piqueteros, que era necesario que funcionase un sistema de premios y castigos y que, logrado eso, sería posible aislar a los violentos y dejarlos en evidencia como paso previo a la represión estatal.

En cambio, Rodríguez Saá y Elisa Carrió coincidían en que este problema no se resolvía con violencia sino con mejoras en la asistencia social y con generación de empleo genuino.



- Políticas contra la Pobreza

La lucha contra el hambre y la pobreza se impuso como un deber social, dado que en las últimas estimaciones del INDEC antes de las elecciones ubicaban al 57,7 % de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, y al 27,7 % subsumido en la indigencia. Frente a este panorama las posiciones de los candidatos fueron las siguientes:

Para Lo Vuolo, referente económico del ARI, “la pobreza no es un problema de programas sociales y no se soluciona de un día para otro”; sin embargo, Elisa Carrió propuso implementar el “Ingreso Ciudadano para la Niñez y la Vejez”, que consistía en el equivalente a \$100 por niño que serían cobrados por las madres. Su idea era que fueran “repartidos sin distinciones y sin clientelismos”. Además, la líder del ARI indicó que su partido impulsaba políticas sociales universales y no focalizadas, prometiendo la implementación de una política de seguridad alimentaria así como también una política especial para el norte del país.

López Murphy expresó que pondría en marcha programas tendientes a erradicar la pobreza y la desnutrición infantil. Al igual que Carrió, favoreció la alternativa de ayudar directamente a niños y ancianos, planteando la universalización del sistema de asignaciones familiares para todos los niños, condicionado a la asistencia escolar donde el subsidio se sostendría independientemente de la suerte laboral de los padres. Crítico del asistencialismo político, el candidato de Recrear sostuvo que la población asistida debería recibir sus beneficios a través de los bancos, única forma de impedir la evasión fiscal y las prácticas clientelísticas.

Rodríguez Saá puso también el énfasis en la minoridad y la ancianidad. En cuanto al hambre, prometió aplicar un plan de “Hambre Cero”, similar al impulsado por el Presidente Lula da Silva en Brasil. Asimismo, planteó la necesidad de descentralizar la ejecución de los programas alimentarios y sociales y de duplicar el gasto social del Estado

Por su parte, Néstor Kirchner manifestó que la aplicación de políticas contra la pobreza se haría por regiones y no globalmente ya que, de esta manera, se podrían planificar acciones sociales que respondan a necesidades particulares. Otro punto al que hizo referencia en cuanto a la pobreza fue a la creación de un Gabinete Social Federal para concentrar todos los planes sociales.

Por último, Carlos Menem prometió que su gobierno liquidaría la pobreza. En este sentido declaró que daría prioridad al combate del hambre otorgando alimentos gratis a los pobres e instalando en las zonas más necesitadas. Dijo también que promovería la instrumentación de una tarifa social en todos los servicios destinada a asegurar el acceso y la prestación del servicio a todas las familias de bajos ingresos.

- Políticas de Seguridad

Más allá de que los medios de comunicación podían magnificar la percepción social de la inseguridad, existían datos estadísticos que revelaban que este problema era más que una sensación genera-

lizada del inconsciente colectivo. En los últimos años se había triplicado la tasa de delitos y duplicado la tasa de homicidios a nivel nacional, y estas cifras se potenciaban en los grandes centros urbanos, en especial en el conurbano bonaerense. Con semejante panorama, las políticas que los candidatos presentasen con el fin de revertir esta tendencia delictiva y de asegurar cierta tranquilidad social aparecían como esenciales a los ojos de los electores.

Con el pragmatismo que lo caracteriza, el ex presidente Menem enarboló la lucha contra el delito como bandera de campaña. La idea fuerza de su plataforma frente a este problema era emplear Fuerzas Armadas en el control de la seguridad y el combate del delito. Siguiendo esta lógica, prometió aplicar una política que aumentaría la cantidad de policías y demás fuerzas de seguridad en las calles, por lo que, anunció, en un plazo de un mes crearía el ambiente de paz necesario para el normal desarrollo de la vida en comunidad.

No perdiendo oportunidad para confrontar con Menem, tanto Elisa Carrió, como López Murphy, y Rodríguez Saá (cada uno a su modo) mostraron su oposición al plan menemista de usar a las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad urbana. Para la legisladora chaqueña con el ejército en la calle solo se generaría más violencia, y por eso propuso la creación de un Consejo Nacional de Prevención del Delito que coordinase políticas a nivel nacional, provincial y municipal. López Murphy, en cambio, marcó la necesidad de reorganizar las fuerzas policiales y de seguridad y, paralelamente, llevar adelante una modernización del sistema penitenciario para responder con eficacia al incremento del delito

Rodríguez Saá, quien argumentó que las FFAA no tienen ningún papel en la seguridad interior, pero que si asumiera el gobierno nuevamente buscaría coordinar los esfuerzos de las fuerzas provinciales y nacionales para prevenir y dar combate integral a la delincuencia. El santacruceño Néstor Kirchner por su parte, presentó un programa integral de seguridad a largo plazo, que abarcaba cuestiones preventivas y normativas. Un punto original de este programa consistía en lograr un cambio en la formación académica de las fuerzas de seguridad, para procurar una policía ágil, honesta y moderna que estuviese a la altura de las exigencias del momento.

• Políticas Sanitarias

En general relegadas a un plano secundario, las propuestas programáticas en el área de salud constituyeron, sin embargo, un aspecto relevante de los planes de gobierno de los diferentes candidatos a la presidencia. Aunque discrepando en los modos de instrumentación, los principales aspirantes a la Casa Rosada compartían un mismo objetivo básico: que todos los habitantes del país accediesen a una cobertura eficiente y de calidad. Una de las principales diferencias, en cambio, se presentaba en las posiciones respecto a los métodos anticonceptivos.

En caso de triunfar en los comicios el ARI unificaría las carteras de Salud y Desarrollo Social e instrumentaría un "Plan de inclusión social y atención primaria" conjuntamente con la elevación del presupuesto del área. Al mismo tiempo, Carrió hizo referencia a un plan de "Control de Salud Materno



Infantil” y sostuvo que aumentaría la producción estatal y distribución gratuita de medicamentos genéricos, lo cual contribuiría a regular los precios. En materia de salud sexual, esta candidata enfatizó la necesidad de garantizar el acceso a anticonceptivos pero aclaró que no impulsaría la legalización del aborto.

A diferencia de Carrió, Rodríguez Saá puso a la salud reproductiva como uno de los pilares de su programa, y, en ese sentido, promovió la despenalización del aborto. También él pondría énfasis en la atención primaria y la prevención, así como una reforma de la educación universitaria de los médicos.

La propuesta de política sanitaria de López Murphy consistía, en el corto plazo, en la transformación de los hospitales públicos y los universitarios en centros de atención para personas sin cobertura médica. En cuanto al mediano y largo, haría obligatorio un seguro de salud cubierto por un Programa Médico Obligatorio. De igual forma propuso desregular las obras sociales, estudiar una ley de genéricos, y actuar para revertir la superpoblación de médicos y el déficit de enfermeras.

Por su parte, Carlos Menem buscaría unificar los planes de salud para reducir estructuras superpuestas y haría que las obras sociales fuesen la “columna vertebral del sistema de salud”. Respecto a los anticonceptivos se oponía al reparto de los mismos por considerar esto una “intromisión del Estado en la Esfera privada”.

Finalmente, debemos decir que Kirchner no ofreció demasiados detalles sobre su plan de salud, tal vez porque la supuesta continuidad de Ginés González García en este ministerio limitaba su posibilidad de innovar demasiado en la cuestión; aunque sí se pronunció, por ejemplo, a favor del mantenimiento de la política de medicamentos genéricos.

3. Consideraciones Finales

Luego de dar cuenta de las propuestas de los diferentes, podríamos alegar que la agenda electoral correspondiente a los comicios del 27 de abril de 2003 estuvo condicionada principalmente por tres factores: la fragmentación del sistema de partidos, la apatía del electorado, y la profunda crisis política y económica por la que atravesaba el país.

Los dos partidos que tradicionalmente habían competido por el sillón presidencial perdieron fuerza y fisonomía al ser incapaces de resolver sus conflictos domésticos. Así, el justicialismo, que había eludido sus elecciones internas, presentaba tres candidatos, trasladando sus contiendas internas a la palestra nacional. Kirchner, Rodríguez Saá y Menem competían individualmente disputándose la histórica masa de votos del PJ apelando a un mismo “peronismo” que quedaba desdibujado entre discursos que iban desde la alianza pro-yanqui planteada por Carlos Menem, pasando por el keynesianismo nacionalista de Kirchner, hasta el populismo voluntarista de Rodríguez Saá. Sin embargo, más allá de sus divergencias en cuanto a propuestas los tres apelaban a una misma matriz del hacer político: la maquinaria del poder del Estado puesta al servicio de la contienda electoral, como ser, el apoyo hegemónico de tres pequeñas provincias, a lo que en el caso de Kirchner se sumaba el patrocinio del propio Presidente y del pesado aparato duhaldista en la provincia de Buenos Aires. En

términos de recursos, esto ponía al oficialismo en amplia ventaja respecto a los menguados caudales de la oposición que competía en inferioridad de condiciones.

Los otros dos candidatos con posibilidades equivalentes de acceder a la presidencia eran originarios de la Unión Cívica Radical, partido que había quedado desarticulado y abatido después de la crisis del 2001 a causa de la ineptitud y renuncia de Fernando De la Rúa. Sin embargo, las diferencias entre Ricardo López Murphy y Elisa Carrió eran hondas y motivo de frecuentes diatribas. Si bien Carrió encarnaba un regeneracionismo dirigido a la centroizquierda y López Murphy representaba un reformismo desde la centroderecha, ambos disputaban los votos no peronistas, es decir, aquella masa electoral que había quedado huérfana del radicalismo y el Frepaso y que estaba lista a suscribirse al mejor postor.

En síntesis, lo que queremos reflejar con lo anterior es que la *lógica* utilizada en la definición de la agenda electoral estuvo condicionada en estos comicios por el fin del bipartidismo y por la multiplicidad de candidatos con posibilidades equivalentes de triunfar. En otras palabras: la fragmentación partidaria incidió sobre el repertorio de opciones que se presentaban ante el elector, y la situación de paridad que mostraban las encuestas era motivo de duros enfrentamientos para entrar en el ballottage. En la competencia por atraer votos la agenda se vio connotada por discursos agresivos y descalificadores, por la construcción de enemigo, por la búsqueda de presentarse como “el cambio” diferenciándose del resto, intentando ser originales, pretendiendo tener tanto la primera palabra como la última en diversas cuestiones.

A causa de esto los argentinos nos empezábamos a asomar a una nueva táctica de antagonismo en elecciones ejecutivas: esta vez el debate cruzaba en diagonal a los viejos partidos y, por momentos, hacía caso omiso de izquierdas o derechas y aunaba los discursos dirigidos a un electorado escéptico y decepcionado. Había que recuperar la confianza de la sociedad en la clase política, era necesario fortalecer la idea de representación y regenerar las esperanzas. En este sentido, la *forma* en que los candidatos daban a conocer sus agendas estuvo condicionada por el intento de recuperar el protagonismo y la atención, adaptando sus discursos a un amplio electorado indiferente e indeciso. Es decir, la debilidad de las creencias, la volatilidad que reflejaban las encuestas, y la existencia de grandes contingentes de votos no cautivos influyeron en los modos en que se presentaron las agendas electorales, así como también en la generalidad, abstracción y multiplicidad de temas tratados en ellas.

Por lo tanto, si bien la de 2003 no fue una campaña que pueda caracterizarse por la originalidad de su publicidad, de sus slogans, anuncios o propagandas televisivas, sí puede distinguirse por la búsqueda de un acercamiento a la ciudadanía en actos, caminatas, charlas y viajes por todo el país: el objetivo era poder transmitir personalmente sus propuestas de gobierno. La causa, en algunos casos, fue también la escasez de recursos, en otros, la pretensión de hacer marketing del “no marketing”, y, en general, la intención de denotar austeridad frente a una sociedad cansada del despilfarro de los políticos.

Por último, el *contenido* de la agenda electoral estuvo determinado por la aguda crisis que afectaba tanto a la economía, como al sistema político y a la propia sociedad argentina. Esta vez a la oportunidad electoral se le sumó la oportunidad de cambio que toda crisis trae consigo en la búsqueda de una salida a flote. Pero si bien por un lado la crisis dio lugar a la introducción de temas y planteos que



tal vez no hubiesen sido aceptados en tiempos “normales”, por otro debe reconocerse que también limitó la capacidad de opción de políticas entre los candidatos a quienes, más bien, se les impusieron problemas que eran ineludibles.

En sí, la agenda electoral daba cuenta del estado de necesidad que aquejaba al país, o sea, trataba de dar respuesta a cuestiones estructurales aún no resueltas y a problemas nuevos, propios de la coyuntura electoral, que se imponían por su propia magnitud, o bien, por la relevancia que los medios de comunicación le conferían.

Cómo terminó esta competencia, quiénes fueron los vencedores y quiénes los vencidos, el porqué de la renuncia de Menem a la segunda vuelta, el análisis de cuán demagógicas o cuán sinceras fueron las promesas de Kirchner y de qué nivel de legitimidad y continuidad gozan actualmente sus políticas de gobierno, son cuestiones que merecen ser analizadas en sintonía con la información hasta aquí registrada, especialmente para ver cómo (y cuánto) de la agenda electoral se volvió agenda de gobierno, porque como dijo Maquiavelo (1995: 57): “*Los hombres son incrédulos, no creen realmente en las cosas nuevas hasta que no estén firmemente respaldadas por la experiencia*”.

4. Bibliografía

AA.VV. 2003. *Cambio Institucional y Agenda Pública: La Provincia de Santa Fe en los años noventa*. Rosario: UNR Editora.

Aguilar Villanueva, Luis. 1993. “Estudio introductorio”, en Aguilar Villanueva, Luis. *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Ed. Porrúa.

Draibe, Sonia. 1992. “La reforma del Estado en América Latina: observaciones sobre el caso brasileño”, en *Perfiles Latinoamericanos*, n° 1, México: FLACSO.

Elder, Charles y Cobb, Roger. 1993. “Formación de la agenda. El caso de la política de ancianos”, en Aguilar Villanueva, Luis. *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Ed. Porrúa.

Grindle, Merilee y Thomas, John. 1989. “Policy makers, policy choices, and policy outcomes: The political economy of reform in developing countries”, en *Policy Sciences*, Volume 22, Issue 3, pp 213–248.

Maquiavelo, Nicolás. 1995. *El Príncipe*. Madrid: Ed. Planeta D`Agostini.

May, Peter. 1993. “Claves para diseñar opciones de política”, en Aguilar Villanueva, Luis. *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Ed. Porrúa.

Moore, Mark. 1993. “Anatomía del problema de la heroína: un ejercicio de definición de problemas”, en Aguilar Villanueva, Luis. *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Ed. Porrúa.

Nelson, Barbara. 1993. “La formación de una agenda”, en Aguilar Villanueva, Luis. *Problemas públicos y agenda de gobierno*. México: Ed. Porrúa.

5. Fuentes Hemerográficas:

Diario Clarín (del 15 de febrero al 27 de abril de 2003)

Diario La Nación (del 15 de febrero al 27 de abril de 2003)

Diario Página/12 (del 15 de febrero al 27 de abril de 2003)